

INE/CG313/2021

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL “VISIÓN Y ORDEN SONORA (VOS)”, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/57/2021/SON

Ciudad de México, 25 de marzo de dos mil veintiuno.

VISTO para resolver el expediente identificado con la clave alfanumérica **INE/Q-COF-UTF/57/2021/SON**.

A N T E C E D E N T E S

I. Presentación de escrito de queja. El siete de enero de dos mil veintiuno se recibió en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Sonora, escrito de queja signado por la Lic. Liza Adriana Auyón Domínguez, en su calidad de Representante del Partido Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Sonora y el Lic. Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum, en su carácter de Representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Sonora, en contra del Partido Revolucionario Institucional y de la Agrupación política Estatal Visión y Orden Sonora, denunciando a por hechos que consideran podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, dicho escrito fue recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización el quince de enero del dos mil veintiuno (Fojas 001 a 037 del expediente).

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproducen los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja (Fojas 005 a 208 del expediente):

“(…)

Hechos en que se basa la queja:

Con fecha 14 de noviembre de 2020, la Agrupación Política Estatal Vos Visión y Orden Sonoro presentó ante el Instituto Estatal Electoral, lo que denominó acuerdo de participación con el Partido Revolucionario Institucional, solicitando la aprobación del mismo.

*En Sesión de fecha 3 de enero de 2021 el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Sonora aprobó el **Acuerdo CG6/2021** denominado: “POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL ACUERDO DE PARTICIPACIÓN PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y LA AGRUPACIÓN política ESTATAL VOS visión Y ORDEN SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021”.*

No obstante su aprobación, el acuerdo contiene varias cláusulas que constituyen claras y severas infracciones de fiscalización y/o delitos electorales y en el caso de los últimos, con fundamento en el artículo 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, solicito se de vista ala (sic) Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEPADE) o bien, a la Vice Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de Sonora.

Como antecedente, manifestamos que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora describe en su artículo 86 el objeto de las Agrupaciones Políticas Estatales, que es coadyuvar en el desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.

En cuanto a la participación de las agrupaciones estatales en los procesos electorales, establece el artículo 87, que solamente pueden participar mediante Acuerdos de participación con partidos políticos, coaliciones o candidaturas surgidas de los acuerdos serán registradas por un partido político con sus emblemas.

Del artículo 87 de la Ley electoral sonorense se infiere que la única participación que pueden tener las Agrupaciones Políticas en los procesos electorales es mediante Acuerdo de participación con partidos, coaliciones o candidaturas comunes y que el objeto de sus acuerdos se limita a proponer personas para las candidaturas.

Sin embargo, se establecen en el Acuerdo de participación clausulas con un objeto o materia distinta a lo mencionado en el párrafo anterior, mismas que están prohibidas en nuestra regulación de fiscalización y que incluso constituyen delitos electorales, tales como las siguientes:

CLAUSULA TERCERA: *La Agrupación se compromete a hacer promoción electoral y difusión y comunicación en todo el estado a favor de los candidatos del PRI.*

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/57/2021/SON

CLAUSULA CUARTA: *El PRI se obliga a entregar a la Agrupación Política estatal información, materia electoral, enlace estatal y recursos financieros (dinero, que podría ser incluso público, por ser financiamiento público.*

CLAUSULA QUINTA: *La Agrupación Política Estatal se obliga a realizar las acciones para lograr los objetivos de los resultados electorales.*

CLAUSULA SEXTA: *Las partes se obligan a fortalecer la imagen del PRI frente a la opinión pública, buscando el incremento de la votación a favor del PRI en el Proceso Electoral.*

CLAUSULA SÉPTIMA: *Vos Visión y Orden Sonora se compromete a promover el voto a favor del PRI, con sus recursos humanos y movilización, esto último constituye el delito previsto en el artículo 7 fracción X, de la Ley General de Delitos Electorales, que consiste en “organizar la reunión o el transporte de votantes el día de la Jornada Electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto” por lo que pido es de vista a la Fiscalía especializada para la Atención de Delitos Electorales o bien a la Vicefiscalía (sic) especializada en delitos electorales de la Fiscalía General del Estado de Sonora.*

CLAUSULA NOVENA: *La Agrupación se compromete a coadyuvar con la estructura territorial del PRI en todos los municipios.*

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Los gastos de movilización de ciudadanía que realice la Agrupación, así como para la operación de la Comisión Política estatal y de las delegaciones municipales, tendrán el apoyo financiero del PRI, iniciando en enero hasta que concluya el proceso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: *Vos Visión y Orden Sonora “se compromete” a la utilización correcta de los recursos.*

Todas las cláusulas mencionadas tienen un objeto que choca con un uso legal de los recursos de los partidos políticos, los partidos no pueden entregar dinero a las Agrupaciones Políticas para que éstas hagan campaña a sus candidatos, mejoren la imagen del partido y menos pueden convenir pagarles para que cometan delitos electorales como la movilización a que se refieren las cláusulas 7 y 11, ni para el sostenimiento u operación de la Agrupación.

Las Agrupaciones tienen una naturaleza a partidista (sic) no pueden estar subordinadas a un partido, ni a expensas de recibir recursos de manera mensual de los mismos para su operación y sostenimiento, tal y como se señala en el Acuerdo que el PRI le haga pagos a partir de enero y hasta que concluya el Proceso Electoral.”

III. Acuerdo de recepción. El quince de enero de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja mencionado y acordó integrar el expediente respectivo con la clave alfanumérica **INE/Q-COF-UTF/57/2021/SON**, registrarlo en el Libro de Gobierno y notificar su

recepción al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Foja 038 del expediente).

IV. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1354/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de expediente de mérito (Foja 039 del expediente).

V. Notificación de la recepción del escrito de queja al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) Con fecha de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/2355/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al C. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de expediente de mérito (Fojas 040 y 041 del expediente).

b) El veintiséis de enero del de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral autorizó a diversas personas para oír y recibir notificaciones en actuaciones del expediente de marras.

VI. Notificación de la recepción del escrito de queja al Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/2356/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al Dip. Sergio Gutiérrez Luna, Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de expediente de mérito (Fojas 042 y 043 del expediente).

VII. Notificación de la recepción del escrito de queja al Representante de la Agrupación Política Estatal “Visión y Orden Sonora (VOS)”. El veintiséis de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/JLE-SON/0208/2021, se notificó al Representante de la Agrupación Política Estatal “Visión y Orden Sonora (VOS)”, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de expediente de mérito (Fojas 051 a 057 del expediente).

VIII. Consulta de expediente. El veintiséis de enero de dos mil veintiuno, compareció en las instalaciones que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización, quien se acreditó como autorizada para consultar en nombre y representación del Partido Revolucionario Institucional, la Lic. Claudia Iveth Lira Vázquez, que es parte de la relación jurídico-procesal del presente procedimiento, quien realizó la consulta de constancias que integran el mismo (Foja 049 y 050 del expediente).

IX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y Carla Astrid Humphrey Jordan y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento administrativo en que se actúa, en términos de lo establecido por el artículo 30 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.

Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la

Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2¹ del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia.

Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, con relación al artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales establecen lo siguiente:

¹ “**Artículo 30. Improcedencia.** (...) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.

“Artículo 30

Improcedencia

1. El procedimiento será improcedente cuando:

(...)

VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto;”

“Artículo 31.

Desechamiento

1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el Proyecto de Resolución que determine el desecharamiento correspondiente, atendiendo a los casos siguientes:

I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención a la parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29, numeral 1, fracciones I o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 del Reglamento.”

En este orden de ideas, de la normatividad antes señalada se desprende lo siguiente:

- Que la autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para conocer de los hechos narrados en el escrito de queja.
- Que, en caso de no cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución que deseche de plano el procedimiento y remita a la autoridad u órgano que resulte competente.

Toda vez que de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; precandidatos, coaliciones; candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y candidatos independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional y organizaciones de observadores electorales a nivel federal.

A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos obligados para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.

Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades públicas que le confiera la ley, éste será competente.

En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin competencia; como efecto de que ésta es constitutiva del órgano, la misma no se puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a los términos establecidos por la ley y el interés público.

Por cuanto hace al caso que nos ocupa, a la luz de la pretensión del quejoso, de actualizarse los hechos se configuraría la participación de una Agrupación Política Estatal con un objeto o materia distinta a lo establecido en la normatividad.

Esto, en observancia al principio de legalidad, ya que la autoridad no puede ejercer sus facultades de investigación por la mera denuncia de hechos futuros que aún no acontecen y que; en consecuencia, aún no actualizan alguna hipótesis normativa, ya que, de hacerlo, esta autoridad estaría actuando fuera de los alcances legales.

Ya que un ilícito es todo **acto u omisión** contrario a la ley previsto y sancionado por la misma y los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Entendiéndose como acto u omisión, aquel comportamiento que tiene como consecuencia un resultado real.

Lo anterior pues el Partido Revolucionario Institucional y la Agrupación Política Estatal “Visión y Orden Sonora (VOS)”, presentaron ante el Instituto Estatal Electoral de Sonora, lo que denominaron *Acuerdo de Participación*, aprobado mediante el Acuerdo **CG06/2021**² en sesión ordinaria del tres de enero de dos mil veintiuno por el Consejo General del referido Instituto Electoral; no obstante, argumenta que se advierte en sus cláusulas una presunta violación a la Legislación Electoral local por cuanto hace a su artículo 87, del cual se desprende que la única participación que pueden tener las agrupaciones políticas en los procesos electorales es mediante Acuerdo de participación con partidos, coaliciones o candidaturas comunes y que el objeto de sus acuerdos se limita a proponer personas para las candidaturas.

Debido a lo antes expuesto, la Representante del Partido Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora, solicita se investiguen los actos de ejecución del acuerdo mencionado que se hayan realizado, para que, en su caso, de acreditarse infracciones en materia de fiscalización, se sancione al Partido Revolucionario Institucional y a la Agrupación Política Estatal “Visión y Orden Sonora (VOS)”.

Es así que de la lectura y análisis a los hechos denunciados en el escrito de queja, en un primer momento, se desprende que los hechos denunciados se basan en la presunción realizada por la quejosa a partir de la lectura del Acuerdo de Participación suscrito entre los denunciados, señalando que Visión y Orden Sonora VOS se comprometen a promover el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional, con sus recursos humanos y **movilización**, mientras que los gastos de movilización de ciudadanía que realice la Agrupación, tendrán el apoyo financiero del Partido Revolucionario Institucional, **situación que a su dicho configura el delito previsto en el artículo 7 fracción X, de la Ley General de Delitos Electorales, que consiste en “organizar la reunión o el transporte de votantes el día de la Jornada Electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto”**.

A partir de lo anterior, esta autoridad electoral considera que, en el presente caso, si bien la quejosa aportó como elementos de prueba, únicamente, el *convenio de participación* del cual manifiesta que pudiera actualizarse alguna infracción en

² Mismo que se adjunta al presente proyecto como **Anexo I**

materia de fiscalización, o bien, un delito electoral, lo cierto es que la queja debe **DESECHARSE** por las razones siguientes:

El artículo 30, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en correlación con el artículo 31, numeral 1, fracción I del citado Reglamento, disponen que la Unidad Técnica de Fiscalización someterá a la aprobación de la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución que decreta el **desechamiento** de una queja, cuando *“la Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto”*.

Las disposiciones contenidas en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización tienen por objeto que la Unidad Técnica de Fiscalización analice cada una de las quejas que se interponen en esta materia y que, antes de decretar su admisión, se detecten las posibles inconsistencias o los elementos que deben aportarse para acreditar -aun de manera indiciaria- que los hechos denunciados constituyen alguna infracción en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos.

En otras palabras, si del escrito de queja se desprenden hechos o elementos suficientes -aún con carácter de indicio- que presupongan la veracidad de la realización de actos ilícitos presentes sancionables por la legislación aplicable, los cuales tuvieran verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, la autoridad fiscalizadora se encontraría constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos.

Particularmente, debe apuntarse que el único hecho que aconteció y que da origen al procedimiento de mérito es la suscripción de un Acuerdo de Participación que fue registrado ante el Instituto Electoral del Estado de Sonora, que por sí mismo no atenta contra la normatividad en materia de fiscalización en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Sonora.

Ahora bien, no es óbice señalar que la quejosa refiere únicamente como hechos en su escrito de queja la celebración y registro de un Acuerdo de Colaboración, y derivado de la suscripción del mismo, señala probables violaciones a la normatividad en materia de fiscalización que aún no acontecen, es decir; que hace del conocimiento de esta autoridad que el denunciado “podría” incurrir en alguna infracción sancionable por esta vía, únicamente si la hipótesis normativa fuera vulnerada al llevarse a cabo una conducta futura; sin indicar y/o denunciar hechos concretos que debieran ser conocidos e investigados por esta autoridad fiscalizadora.

Esto es, el escrito de denuncia no se circunscribe a hechos concretos o conductas ya actualizadas que trajeran aparejados resultados ciertos y reales que transgredieran de forma alguna los bienes jurídicos tutelados por esta autoridad en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos.

Toda vez que, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; precandidaturas, coaliciones; candidaturas a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y candidaturas independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional y organizaciones de observadores electorales a nivel federal.

A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos obligados para la consecución de sus actividades. En este orden de ideas, el cumplimiento de sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.

En la especie, de la lectura de los hechos denunciados se puede aseverar que los hechos narrados no transgreden la normatividad en materia de fiscalización por lo siguiente:

- La denuncia se presenta por la Lic. Liza Adriana Auyón Domínguez, en su calidad de Representante del Partido Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Sonora y, el Lic. Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum, en su carácter de Representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Sonora, en contra del Partido Revolucionario Institucional y la Agrupación Política Estatal “Visión y Orden Sonora (VOS)”, por supuestos actos que pudieran constituir infracciones en materia de fiscalización si se llegaran a realizar determinadas conductas, esto es, denuncia hechos futuros de realización incierta; sin que esto sea elemento suficiente para actualizar la hipótesis normativa sancionable en materia de fiscalización.

En efecto, de la lectura integral al escrito de queja presentado, se advierte que, si bien la quejosa indica que el desarrollo de los hechos denunciados podría infringir los bienes jurídicos tutelados por el marco normativo en materia de fiscalización, lo cierto es que los hechos narrados y las circunstancias de tiempo modo y lugar aportadas únicamente versan sobre la suscripción de un Acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Sonora por el que se aprueba la Solicitud de Registro del Acuerdo de Participación celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y la Agrupación Política Estatal “Visión y Orden Sonora (VOS)”, por lo que se advierte que la pretensión del quejoso es controvertir el referido Acuerdo y su contenido aduciendo que del mismo se advierte que se pretenden cometer conductas ilícitas, sin embargo, dada la naturaleza del acto en cuestión, el registro del Acuerdo de Participación debió impugnarse ante el Tribunal Electoral del Estado de Sonora.

Empero subyace el acuerdo de voluntades que deriva de su cláusula séptima, de cuya ejecución podría actualizarse **el delito previsto en el artículo 7 fracción X, de la Ley General de Delitos Electorales, que consiste en “organizar la reunión o el transporte de votantes el día de la Jornada Electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto”**.

Llegados a este punto, resulta evidente que la pretensión subyacente es analizar una transgresión prevista en la Ley General de Delitos Electorales, para determinar si existe una intención de influir en el sentido del voto por parte de VOS a cambio de recibir recursos del partido político; de tal suerte que resulta indispensable la determinación del caso por la autoridad competente.

Sobre este aspecto, y sin pronunciarse sobre el fondo de la conducta antes mencionada, se puede afirmar válidamente que las actividades inherentes a la Agrupación Política Estatal “Visión y Orden Sonora (VOS)” y las posibles consecuencias jurídicas que se originen por su desempeño, se deben ceñir al orden jurídico de la Ley General de Delitos Electorales.

Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades públicas que le confiera la ley, éste será competente.

Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las atribuciones que el Estado les tiene encomendadas.

En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no se puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a los términos establecidos por la ley y el interés público.

Por lo tanto, la competencia refiere el ámbito, la esfera o materia dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones; en ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, establece lo siguiente:

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...)”

Dicha referencia a la autoridad competente engloba cualquier tipo de ésta, ya sea legislativa, administrativa o judicial; así pues, el ánimo del constituyente tuvo por objeto que el gobernado tuviera con ello la garantía de que los actos de molestia dirigidos a éste provengan siempre de una autoridad competente, es decir, emanen de una autoridad que actúa en un ámbito o esfera dentro de los cuales puede válidamente desarrollar o desempeñar sus atribuciones y funciones.

Así pues, justificar expresamente cada supuesto es importante atendiendo a que en la actuación de los órganos de carácter administrativo se pueden realizar considerables actos que afectan o impactan los intereses particulares, se hace necesario que esos intereses se encuentren garantizados contra la arbitrariedad; en virtud de ello, es que el legislador impone la obligación de que una ley autorice la actuación del Poder Público, así éstos serán realizados dentro de normas legales.

Por cuanto hace al caso que nos ocupa, a la luz de la pretensión de la quejosa, de actualizarse los hechos que presume a partir del registro del Acuerdo de Participación celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y la Agrupación Política Estatal Visión y Orden Sonora VOS, **nos encontraríamos ante delitos electorales con incidencia en el Proceso Electoral Local Ordinario 2021 en el estado de Sonora.**

Por tanto, dada la temporalidad y naturaleza intrínseca de los hechos materia de la denuncia, esta autoridad colige que la pretensión que subyace recae sobre la premisa de la presunta actualización de influir en el sentido del voto, establecida en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Debido a lo anterior, toda vez que el escrito de queja consigna hechos que podrían ubicarse en el supuesto aludido, resulta indispensable que las conductas atinentes sean investigadas por la autoridad competente, y en su caso, emita el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.

Ahora bien, como fue analizado en los párrafos que anteceden, la Unidad Técnica de Fiscalización no es competente para determinar **la presunta movilización de la ciudadanía con la finalidad de influir en el sentido del voto.** De este modo, y en consideración a los argumentos expuestos, correspondería conocer de dicha conducta a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

En consecuencia, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de determinar el **desechamiento de plano** del escrito de queja debido a la notoria incompetencia para conocer de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación con el artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

3. Vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de Sonora. En ese sentido, por las razones expuestas a lo largo de la

presente Resolución, al advertirse una presunta actualización de la hipótesis prevista en la fracción VII artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, este Consejo General considera que ha lugar a dar vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de Sonora, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda.

4. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto **aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020**, por el que determinó la **notificación electrónica** de las actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente:

- A. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.
- B. Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19, es que resultó necesaria la implementación de herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo electrónico.

Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la realizada “vía electrónica”.

- C. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y

privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral de Fiscalización, respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su instituto político.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1 y 44, numeral 1, inciso j) y aa) y 199, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **desecha** el presente procedimiento administrativo sancionado de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional y la Agrupación Política Estatal “Visión y Orden Sonora (VOS)”, de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 2** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se ordena dar **Vista** a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de Sonora, en términos del **Considerando 3** de la presente Resolución para los efectos conducentes.

TERCERO. Notifíquese electrónicamente a la quejosa a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el **Considerando 4** de la presente Resolución.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/57/2021/SON

CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 25 de marzo de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**